



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

EXP. N.º 1011-2005-PA/TC
LAMBAYEQUE
ISMAEL FERNÁNDEZ CAMACHO

SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

En Lima, a los 19 días del mes de marzo de 2007, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, integrada por los señores magistrados Landa Arroyo, Alva Orlandini y Vergara Gotelli, pronuncia la siguiente sentencia

ASUNTO

Recurso de agravio constitucional interpuesto por don Ismael Fernández Camacho contra la sentencia de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, de fojas 83, su fecha 5 de enero del 2005, que declara improcedente la demanda de amparo de autos.

ANTECEDENTES

Con fecha 15 de marzo del 2004, el recurrente interpone demanda de amparo contra la Oficina de Normalización Previsional (ONP), solicitando que se declare inaplicable la Resolución N.º 0000052043-2003-ONP/DC/DL19990, de fecha 30 de junio del 2003, que le deniega su pensión de jubilación de acuerdo con el Decreto Ley N.º 19990; y que, en consecuencia, se le otorgue su pensión de conformidad con la Ley N.º 23908, más los devengados correspondientes.

La emplazada contesta la demanda solicitando que se declare infundada alegando que el demandante no ha acreditado los aportes al Sistema Nacional de Pensiones durante el período de 1948 a 1950, de 1954 a 1956, y de 1961 a 1962. Respecto de la aplicación de la Ley N.º 23908, alega que con esta norma se estableció el monto mínimo de la pensión en tres sueldos mínimos vitales, pero no se dispuso que fuera, como mínimo, tres veces más que el sueldo básico de un servidor en actividad, el cual nunca llegó a hacer igual al ingreso mínimo legal, que estaba compuesto por el sueldo mínimo vital más las bonificaciones por costo de vida y suplementaria.

El Cuarto Juzgado Especializado en lo Civil de Chiclayo, con fecha 8 de julio de 2004, declara fundada, en parte, la demanda, estimando que la demandada, al declarar la caducidad de las aportaciones, no observó las formalidades establecidas en el Decreto Supremo N.º 011-74-TR, constituyendo una arbitrariedad que lesiona el derecho de toda



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

persona de acceder a una pensión de jubilación, e improcedente en cuanto al pago de las pensiones devengadas y la aplicación de la Ley N.º 23908.

La recurrida, revocando la apelada, declara improcedente la demanda, considerando que los certificados de trabajo presentados por el demandante resultan insuficientes para acreditar las aportaciones efectuadas al Sistema Nacional de Pensiones.

FUNDAMENTOS

1. En el fundamento 37 b) de la sentencia del expediente 1417-2005-PA/TC, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 12 de julio de 2005, este Tribunal señaló que formaban parte del contenido esencial directamente protegido por el derecho fundamental a la pensión las disposiciones legales que establecen los requisitos para la obtención de tal derecho, y que si, cumpliéndolos, se declara su denegatoria, podrá solicitarse su protección en sede constitucional.
2. En el presente caso se configura el citado supuesto, dado que el actor no se encuentra percibiendo pensión alguna, siendo atendible su demanda a través del proceso de amparo.

Análisis de la controversia

3. Si bien el demandante no lo expone de forma expresa, debe inferirse que el objeto de la demanda es que se le otorgue pensión de jubilación de acuerdo con el régimen especial del Decreto Ley N.º 19990, aplicando además la Ley N.º 23908, abonándosele las pensiones devengadas.
4. Conforme al artículo 47.º del Decreto Ley N.º 19990, el *régimen especial de jubilación* comprende, en el caso de los hombres, a los asegurados obligatorios y de continuación facultativa nacidos antes del 1 de julio de 1931, requiriendo asimismo tener 60 años de edad, 5 años de aportes completos y estar inscritos en alguna de las Cajas de Pensiones a la fecha de promulgación del decreto ley.
5. A fojas 1 de autos obra el DNI del recurrente por medio del cual se acredita que nació el 20 de junio de 1929, y que cumplió los 60 años de edad el 20 de junio de 1989.
6. Por otro lado, a fojas 2 y 3 se acredita, mediante certificado de trabajo, que el demandante trabajó en la empresa Imprenta Castillo S.A., desde el 12 de abril de 1948 hasta el 24 de junio de 1950; asimismo, acredita que laboró en la lavandería Super Dry Cleaners del Norte, desde el 31 de enero de 1954 hasta el 5 de abril de 1956, desde el 3 de marzo de 1961 hasta el 27 de junio de 1962, totalizando más de 5 años de labores.

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

7. En consecuencia, el demandante alcanzó la contingencia el 20 de junio de 1989, al reunir los requisitos legales exigidos para la percepción de la pensión reclamada; por lo tanto, la demandada debe otorgar la pensión de jubilación del régimen especial.
8. En cuanto a la aplicación de la Ley N.º 23908, cabe precisar que este Tribunal ha establecido en reiterados pronunciamientos que el Decreto Ley N.º 25967 modificó los requisitos del Decreto Ley N.º 19990 para el goce de las pensiones, entendiéndose que desde la fecha de su vigencia se sustituía el beneficio de la pensión mínima por el nuevo sistema de cálculo, resultando, a partir de su vigencia, inaplicable la Ley N.º 23908, conforme a la interpretación realizada por este Tribunal Constitucional en la sentencia recaída en el expediente N.º 5189-2005-PA/TC.
9. Debe entenderse, por tanto, que todo pensionista que hubiese alcanzado el punto de contingencia antes de la derogatoria de la Ley N.º 23908, tiene derecho al reajuste de su pensión si estuviera percibiendo un monto inferior a tres sueldos mínimos vitales en cada oportunidad de pago de la pensión, durante el referido periodo de tiempo.
10. En el presente caso, como ya se observó en el fundamento 7, *supra*, el punto de contingencia se alcanzó antes de la dación del Decreto Ley N.º 25967, es decir, es de aplicación la Ley N.º 23908; no obstante, para determinar el cálculo del mínimo vital se necesita conocer el monto que percibía por pensión, para saber si estaba dentro del mínimo vital; no pudiéndose verificar ello de autos, debido a que el recurrente no cobraba pensión alguna en aquella época, por lo que resulta posible determinar la procedencia de la aplicación de dicha norma.
11. Respecto a las pensiones devengadas, el artículo 81.º del Decreto Ley N.º 19990 establece que solo se otorgarán pensiones devengadas correspondientes a un periodo no mayor de doce meses anteriores a la presentación de la solicitud del beneficiario.
12. Con respecto al pago de intereses legales, este Tribunal, en la STC 0065-2002-AA/TC, del 17 de octubre de 2002, ha precisado que corresponde el pago de los intereses legales generados por las pensiones de jubilación no pagadas oportunamente, razón por la cual se aplica dicho criterio en el presente caso, debiéndose abonar los intereses legales a tenor de lo estipulado en el artículo 1246 del Código Civil.

Por estos fundamentos, el Tribunal Constitucional, con la autoridad que le confiere la Constitución Política del Perú

**TRIBUNAL CONSTITUCIONAL**

EXP. N.º 1011-2005-PA/TC
LAMBAYEQUE
ISMAEL FERNÁNDEZ CAMACHO

HA RESUELTO

1. Declarar **FUNDADA**, en parte, la demanda; en consecuencia, **NULA** la Resolución N.º 0000052043-2003-ONP/DC/DL 19990, ordenando que la emplazada expida Resolución de pensión de jubilación con arreglo a los fundamentos expuestos y al Decreto Ley N.º 19990, abonándole al demandante los devengados, intereses y costos de conformidad con el artículo 56.º del Código Procesal Constitucional.
2. Declarar **IMPROCEDENTE** la demanda en el extremo referido a la aplicación de la Ley N.º 23908.

Publíquese y notifíquese.

SS.

LANDA ARROYO
ALVA ORLANDINI
VERGARA GOTELLI

Lo que certifico:

Dr. Daniel Figallo Rivadeneyra
SECRETARIO RELATOR (e)